



FUNDACION FELIPE HERRERA LANE

INFORME DE TENDENCIAS

JULIO 2021

El periodo legislativo y las elecciones

En el mes de agosto vence el plazo de inscripción de las candidaturas presidenciales y parlamentarias y comienza formalmente la campaña, en donde los actuales parlamentarios que postulan a la reelección, deberán dividir su tiempo entre las actividades legislativas y su campaña. Naturalmente, ello representa una dificultad para la tramitación de los proyectos y se hacen imprescindible priorizar los temas de la agenda legislativa. Con toda probabilidad, la agenda cobrará mayor dinamismo tras las elecciones, en la llamada agenda de cierre, cuando todas las miradas están puestas en la futura administración.

El gobierno había definido sus prioridades centradas en la reforma de carabineros, la ley de fármacos II y la reforma del sistema de pensiones, sin descartar que puedan aprobarse proyectos referidos a la protección de la infancia, además de la ratificación del TPP-11, que pudiera votarse después de la próxima elección presidencial, con fuertes presiones de diversos sectores empresariales, que afirman que el país está perdiendo competitividad en la región, tras la reciente ratificación del parlamento peruano a este tratado.

El otro tema relevante que hoy se debate en el parlamento es el nuevo royalty minero, en medio de fuertes presiones de empresas mineras, que estiman que la iniciativa desalienta futuras inversiones y el país arriesga a perder liderazgo en este sector.

El polémico indulto a los presos de la revuelta

Sin embargo, la polémica iniciativa que concede indulto (o amnistía) a los llamados “presos de la revuelta” ha cobrado renovada fuerza, con la presión ejercida por algunos convencionales vinculados a la llamada lista del pueblo y sectores de izquierda, por su pronta aprobación. De igual manera, se han registrado numerosas

manifestaciones que exigen la libertad de los supuestos presos políticos durante la revuelta.

La iniciativa divide fuertemente las opiniones al interior del parlamento. Tanto el Ejecutivo como sectores del poder judicial y la fiscalía nacional, han expresado un claro rechazo, en tanto que algunas universidades consultadas han manifestado sus reparos.

Por su parte, agrupaciones de comerciantes, han expresado su rechazo a una iniciativa que dejaría en la impunidad a autores de numerosos saqueos y danos a los negocios privados a lo largo del país, sentando un funesto precedente.

El senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, reconociendo que el origen principal del conflicto es político y que se debe buscar una salida al problema, ha puesto en evidencia los múltiples problemas jurídicos y factuales que entraban una posible solución “que no puede exceder el marco jurídico del país.

Hasta la fecha no ha sido posible precisar quiénes y cuántos son estos presos por la revuelta y cuál es su situación procesal. Las cifras varían radicalmente según sean los criterios que se apliquen para identificarlos.

El segundo gran problema, según lo definiera el senador Pedro Araya “es el catálogo de delitos a indultar, Una cosa es indultar a quienes fueran condenados por desórdenes en la vía pública o daño a la propiedad pública. Y otra cosa muy distinta, es indultar simples delitos, como saqueos, incendios, porte y tenencia de armas de fuego y asalto a recintos policiales.

Adicionalmente es preciso distinguir el indulto a personas con nombre y apellidos, procesadas y condenadas por la justicia, de una amnistía, que borra el delito y que podría favorecer no tan solo a los llamados presos de la revuelta sino también a delincuentes comunes.

El senado debería conocer del proyecto e incluso votarlo en las próximas semanas y parece más que evidente que requiere de profundas modificaciones para lograr su aprobación, que bien pudieran no resolver la compleja situación.

La reforma previsional

A estas alturas, parece evidente que no se aprobara una reforma del sistema previsional durante la actual administración. Las diferencias entre el gobierno y la oposición se mantienen y lo más sensato será separar el proyecto, aprobando los reajustes a la pensión mínima solidaria, como propusiera la oposición hace más de un año y dejar el proyecto de reforma del sistema de pensiones para el próximo gobierno y parlamento.

El gobierno, que se había resistido a esta fórmula, parece disponible para avanzar en esta dirección, ante la evidencia que no será posible resolver las diferencias en el corto tiempo que le resta de mandato.

Y desde luego, ello implicaría un avance para las personas que actualmente reciben esta pensión solidaria y los millones de personas que, tras los sucesivos retiros, se han quedado sin ahorros y deberán aspirar a una pensión solidaria.

El fantasma del cuarto retiro y la extensión del Ingreso familiar de emergencia (IFE)

Nuevamente se debate la posibilidad de un cuarto retiro de los ahorros previsionales y la demanda de extender el IFE hasta el mes de diciembre. Pese a la disminución de los índices de contagios y los claros avances en el proceso de vacunación, la emergencia sanitaria no ha sido superada. Y no se puede descartar una a tercera ola de contagios con las nuevas variantes del virus, tal como ocurre en Europa y otros países.

Y menos ha sido superada la emergencia social generada por la pandemia. La economía muestra importantes signos de recuperación (o homogénea), sin alcanzar aun los niveles previos a la crisis. Pero el empleo muestra claros signos de rezago y son muchos los sectores que aún no encuentran empleo o han perdido sus fuentes de ingreso.

El gobierno se ha mostrado dispuesto a mantener las ayudas “todo el tiempo que sea necesario”, aunque de manera selectiva, con todo lo que ello pudiera significar. En paralelo, algunos parlamentarios han reactivado el proyecto de un cuarto retiro de los ahorros previsionales, del que estarían excluidos los cinco millones de personas que han agotado sus ahorros.

La iniciativa genera polémicas tanto en el oficialismo como en la oposición, frente al debilitamiento del sistema previsional y la urgente necesidad de incrementar las actuales pensiones.

De manera por demás imprudente, el candidato presidencial de Chile Vamos, que se opone a la iniciativa, ha amenazado a los parlamentarios de su sector que postulan a la reelección, con no apoyarlos en la eventualidad que voten favorablemente la iniciativa, tal como sucediera con los retiros anteriores.

Obviamente que es una mala política pública, que tarde o temprano, de una u otra manera, terminarán pagando los ahorrantes del sistema previsional, que verán fuertemente disminuidas sus futuras pensiones o deberán postular a una pensión solidaria.

La interrogante es como el Estado mantiene la ayuda a los sectores que la necesitan, sin una excesiva focalización y en montos adecuados. Es verdad que el Estado ha hecho un esfuerzo significativo, pero ha sido a destiempo y de manera insuficiente.

Hoy se trata de debatir cómo es posible mantener esas ayudas en el tiempo y como se puede financiar este esfuerzo. Es verdad que no existen demasiadas holguras, como han sostenido los técnicos del gobierno, pero el país está en condiciones de hacer un esfuerzo mayor. Aunque ello implique mayor endeudamiento (que hay que pagar) y comprometer recursos a futuro, del todo indispensables para financiar múltiples reformas que demanda la ciudadanía.

El proceso constituyente

La instalación de la Convención Constituyente no ha estado exenta de dificultades (logísticas, administrativas y financieras). Algunas naturales del inédito proceso de instalar una Convención. Otras son responsabilidad del gobierno, que no tuvo a tiempo la infraestructura necesaria para su funcionamiento Y no pocas, por el necesario proceso de ajuste de los propios convencionales para definir una estructura, aprobar un reglamento (al menos provisorio), organizar el trabajo de comisiones y elegir sus autoridades.

Es preciso reconocer que algunos sectores políticos y medios de comunicación han orquestado una verdadera campana de descrédito sobre la Convención, con críticas en su mayoría injustificadas y sin el beneficio del necesario “periodo de gracia”, que merece el complejo proceso de instalación.

De la misma manera, es necesario asumir que algunos sectores representados en la Convención, mantiene diferencias acerca del rol de la misma, las reglas definidas en la reforma constitucional que le dio origen y una marcada tendencia a intervenir en asuntos de la contingencia.

Pero ello bien puede responder a este proceso de ajuste, que tomara aun algún tiempo, que ojalá sea el mínimo posible, por el bien de la propia Convención. Aun no es claro cómo se alinearán los diversos sectores representados en esta instancia. Ya se han producidos algunos realineamientos, que no necesariamente responden a los alineamientos políticos tradicionales. Tanto entre los representantes de la derecha, como en la izquierda y los propios independientes, parecen existir tensiones a la hora de construir consensos o marcar confrontaciones y todo indica que es parte de este indispensable proceso de ajustes.

Aun no se entra en los debates propiamente constitucionales, que constituyen la esencia de la Convención. Y probablemente sea prematuro demandarlos, pero sería aconsejable que, en paralelo a los asuntos organizativos, se empezaran a prefigurar esos debates.

La elección presidencial y parlamentaria

En las próximas tres semanas deberán quedar definidas las candidaturas presidenciales y parlamentarias. Dos candidatos elegidos en primarias legales, que se constituyeron en una sorpresa no anticipada por la mayoría de las encuestas, con las derrotas de Joaquín Lavín y Daniel Jadue, que aparecían como los favoritos para ganar estas primarias, y la victoria del independiente Sebastián Sichel en la derecha y Gabriel Boric en el pacto de la izquierda.

Luego de largas dilaciones y tironeos, finalmente la Unidad Constituyente aprobó el mecanismo de primarias convencionales o consulta ciudadana, para elegir un candidato o candidata única del sector, resolviendo presentar una lista parlamentaria y un programa común.

Es una buena noticia no tan solo para los partidos que integran la Unidad Constituyente sin para el país, que tendrá más opciones para elegir que aquellas polarizadas que hoy representa el candidato de Chile Vamos y del pacto de la izquierda. Más vale tarde que nunca, aunque no se puede negar que el candidato o candidata que resulte electo (a) en esta consulta entra con obvias desventajas a la carrera presidencial.

La consulta ciudadana acordada por los partidos de la Unidad Constituyente promete ser competitiva. De poco o nada sirven las encuestas, frente a un universo de votantes no determinado. La consulta se decidirá por la capacidad de movilización de los partidos involucrados y la convocatoria al ancho mundo de independientes, que son los que verdaderamente deciden en este tipo de consultas

Yasna Provoste aparece mejor posicionada en las encuestas y cuenta con el apoyo de la Democracia Cristiana que, si bien sufrió un descalabro en la elección constituyente, revalido su condición de partido mayoritario en la centro izquierda en la elección municipal. Por ahora, Yasna Provoste seguirá ejerciendo su cargo de presidenta del senado, con el unánime respaldo de los senadores de oposición. Al menos hasta el 21 de agosto.

Paula Narváez cuenta con el apoyo del PS, el PPD (con algunas deserciones) y Nuevo Trato, además de sectores de centro que apoyan su postulación. En conjunto, estos partidos se constituyen en la principal fuerza política de su coalición. Con más alcaldes, concejales, miembros de la convención constituyente e igual número de gobernadores regionales.

La consulta programa para el próximo 21 de agosto, es sumamente corta y la duda es su grado de convocatoria que, en ningún caso puede aspirar acercarse a la convocatoria alcanzada por las primarias legales, pero debiera ser una convocatoria significativa, sumando a la militancia de ellos partidos y un número significativo de

independientes, que en un porcentaje importante votaron en las primarias legales (principalmente para apoyar a Gabriel Boric) y que el próximo 21 de agosto tienen derecho a votar. Y eso depende del poder de seducción de los candidatos y candidatas y la capacidad de movilización de los partidos.

Con toda probabilidad, se unirá a la carrera presidencial un candidato o candidata de la llamada lista del pueblo, además de Eduardo Artes, sin descartar algún otro candidato independiente.

La duda es como se compondrán las listas parlamentarias. Es más que evidente que mientras más listas se presente, mayor será la dispersión en el futuro parlamento. Todo apunta a que la derecha enfrentara esta elección con dos listas parlamentarias (Chile Vamos y republicanos), en tanto que, en la oposición, la dispersión puede ser mayor. Aun no es claro que el pacto de izquierda pueda presentar una lista parlamentaria (de difícil composición). La Unidad Constituyente ha prometido una lista única (con las mismas dificultades). Los humanistas podrían presentar una lista en solitario y, con toda seguridad, la llamada lista del pueblo levantara su propia lista. Los integrantes de la lista del pueblo están haciendo un intenso lobby para que el parlamento apruebe idénticas condiciones a las que tuvieron para presentar sus candidatos a la Convención Constituyente, pero es altamente improbable que la iniciativa prospere, lo que le obliga a juntar las firmas. Un proceso que ya habrían iniciado.

La gobernabilidad futura del país

La gran interrogante es como se asegura la gobernabilidad futura del país en este fragmentado escenario político y la crisis que hoy vive el país. Para ello se requiere de un gobierno apoyado por una amplia base política, que no asegura por sí solos ninguno de los bloques políticos en competencia, así como una mayoría parlamentaria que asegure la gobernabilidad y viabilice el proceso de cambios y transformaciones que demanda una mayoría ciudadana.

No son desafíos menores.

FUNDACIÓN FELIPE HERRERA

